

21N: el desborde de la movilización en Colombia

por **Mauricio Archila** | Centro de Investigación y Educación Popular/CINEP | marchila@cinep.org.co

Martha Cecilia García | CINEP | mcgarcia@cinep.org.co

Santiago Garcés | CINEP | sgarces@cinep.org.co

Ana María Restrepo | CINEP | arestrepo@cinep.org.co

La agitación social y política vivida en Colombia a fines de 2019 tiene raíces históricas en desajustes estructurales de la sociedad y carencias estatales, al menos desde la segunda mitad del siglo XX. Pero ellas se reactivan en un momento propio que no está desligado de lo que ocurrió en otras partes del continente. Veamos entonces lo ocurrido a fines del año pasado en Colombia, no sin antes enmarcarlo en las tendencias históricas de las luchas sociales en el país. Luego miraremos las principales demandas del paro nacional del 21 de noviembre (21N),¹ tanto por sus convocantes como por las multitudes que salieron a protestar en las ciudades y los campos. Cerramos el artículo con unas reflexiones finales.²



Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP

Como se observa en el gráfico, el 21N viene precedido de un auge en las luchas sociales en Colombia desde 2007 que tuvo su pico en 2013, cuando se dio no sólo el mayor número de protestas registradas en la Base de Datos de Luchas Sociales (BDLS) de CINEP desde 1975, sino un conjunto de paros agrarios que cubrieron todo el país. Aunque las cifras de 2019 no son las más altas, están por encima del promedio anual en los 45 años cuantificados. Y si se pudiera medir con precisión la participación popular, tendríamos que reconocer que la del 21N desbordó cualquier registro histórico. Si bien Colombia no es un país de huelgas nacionales muy frecuentes, las ha habido y más en los últimos tiempos. En cambio, hay una larga tradición de paros locales y regionales, durante mucho tiempo llamados cívicos. El referente histórico es el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977, que terminó con un saldo trágico de una veintena de muertos. En el pasado 21N no hubo tantas víctimas letales pero se destaca el asesinato del estudiante Dilan Cruz por una bala policial en medio de las protestas. La represión también implicó el toque de queda en varias ciudades y una brutal respuesta policial, como no se había visto en el pasado reciente. Y en todo momento el gobierno estuvo cerrado al diálogo; solo a comienzos de diciembre lo abrió tímidamente. Pero ¿qué se negociaba? Veamos.

¹ En realidad duró varios días, pero el inicio y momento de mayor movilización fue el 21 de noviembre.

² Este artículo es una reelaboración y actualización del publicado en la revista *Cien Días* No. 97, octubre-diciembre, 2019.

Pliego de peticiones

El 21N empezó con la convocatoria a una jornada de protesta lanzada en Bogotá el 4 de octubre que luego conformará el Comando Nacional de Paro integrado por las centrales obreras, organizaciones de pensionados, estudiantiles, cívicas, indígenas y campesinas.

Los motivos del paro, como los concebían originalmente los convocantes, eran rechazar lo que denominaron el “paquetazo” económico del gobierno de Iván Duque (2018-2022) y exigir el cumplimiento integral de los acuerdos de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). El “paquetazo” se refería a un conjunto de iniciativas gubernamentales, algunas anunciadas y otras ya en curso, tendientes a profundizar el neoliberalismo.³

Respecto a las reformas anunciadas, miembros del gobierno y representantes gremiales afines a la derecha uribista revelaron los posibles contenidos de la reforma laboral y la pensional. La laboral permitiría la contratación por horas, el pago a los jóvenes por debajo del salario mínimo, que se establecería en forma diferencial por regiones, continuando así con la política fracasada de reducir los costos laborales como herramienta para generar empleo y atacar la informalidad. La pensional implicaría aumentos en la edad de pensión y en la cotización así como la eliminación del régimen público de prima media y la obligatoriedad del sistema de ahorros individual, lo que implicaría la subordinación del derecho a la pensión a los intereses de los fondos privados de pensiones.

Otras iniciativas ya se encontraban en curso, como la creación de un “holding financiero” estatal con 19 entidades del sector público, medida que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque y que, para los convocantes del paro, implicaba una posible “masacre” laboral en dichas entidades así como la transformación de la estructura corporativa

de las empresas estatales en función de su privatización futura. De igual forma, denunciaban otros artículos ya aprobados de dicho Plan Nacional de Desarrollo, que implicaban elementos velados de reforma laboral y pensional. Respecto al proceso de paz con las FARC, los convocantes del paro le exigían al gobierno el cumplimiento de los acuerdos, el respeto a las instituciones emanadas del mismo, y medidas urgentes para detener el asesinato de líderes sociales y de excombatientes.

Sin embargo, el pliego que el Comité Nacional de Paro presentó al presidente Duque el 26 de noviembre, tras varios días de movilizaciones que desbordaron las expectativas de los convocantes y del gobierno, incluyó exigencias adicionales como la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la depuración de la policía; la definición de las políticas ambientales con las organizaciones del sector; el trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción; y el cumplimiento inmediato de los acuerdos firmados con estudiantes, indígenas, campesinos, maestros y otros sectores sociales.⁴

La multiplicidad de demandas previas



El Paro Nacional, desde el primer día, concitó la presencia de múltiples sectores sociales que desplegaron una enorme diversidad de demandas, no todas contempladas en los pliegos de peticiones ya señalados. Este es un hecho

frecuente en los paros cívicos colombianos por las características de los mismos: no es un solo sector el que convoca sino una convergencia de actores sociales, lo que posibilita la participación de una miríada de sujetos colectivos. No hay una sola demanda sino un conjunto de reivindicaciones que, en ocasiones, logran articularse en petitorios

³ Ver la declaración del Encuentro Nacional de Emergencia del 4 de octubre, <https://www.polodemocratico.net/nuestras-noticias/103-nacionales/13658-declaracion-del-encuentro-nacional-de-emergencia-del-movimiento-social-y-sindical-4-de-octubre>.

⁴ Ver pliego presentado al presidente: <http://www.paronacional.com/agenda-del-comite-nacional-de-paro-con-presidencia-de-la-republica/>.

acotados pero, casi siempre, se expresan grupos sociales cuyas vindicaciones exceden por mucho los marcos de petitorios concertados (Fig. 1).⁵

Como hemos dicho, las demandas presentadas el 21N tienen una larga historia. Algunas mostraron el cansancio por asuntos irresueltos o agravados, pero de larga data. Pusieron en evidencia que la gente no aguanta más situaciones de inequidad, violencia, injusticia. Aquí se hará referencia a algunas demandas, que se enunciaron antes del 21N, apoyándonos en información de la BDLS del CINEP, y que se expresaron en las calles colombianas en el Paro Nacional (Figs. 2, 3).



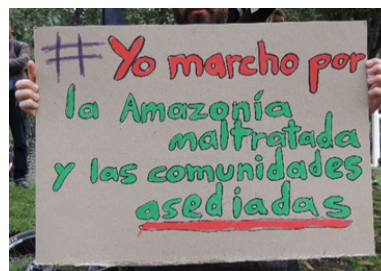
Esta pancarta recordaba que del 5 al 12 de agosto de 2019, una Caravana Humanitaria se desplazó desde Medellín hasta Riosucio (Chocó), con el objetivo de visibilizar la grave crisis humanitaria y el abandono estatal que padece esta zona del país ubicada en la costa pacífica (Fig. 4).



En este cartel se recordaba la lucha de años recientes emprendida por comunidades indígenas Wayuu, afrodescendientes, y campesinas de La Guajira, al norte del país, para frenar el proyecto de la multinacional Carbones del Cerrejón de desviar el río Ranchería y el arroyo Bruno para sacar carbón de sus lechos. Eso también es violencia como reza la pancarta (Fig. 5).

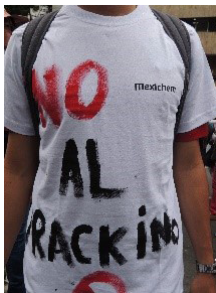


También durante el 2019, ambientalistas y colectivos escénicos llevaron a cabo movilizaciones en varias ciudades, incluida Bogotá, para rechazar la tragedia ambiental ocurrida en la Amazonía, producto de los incendios forestales a gran escala, para tomar conciencia de la catastrófica deforestación del pulmón del mundo, y reclamar al gobierno brasilero una acción urgente ante el daño. También solicitaron al gobierno de Duque que cumpla los compromisos del Acuerdo de París, encaminados a proteger áreas de cuidado ambiental (Fig. 6).



⁵ Figs. 1-18: Fotografías de Martha Cecilia García, tomadas en Bogotá el 21 de noviembre de 2019.

En el primer año de gobierno de Duque se llevaron a cabo cinco movilizaciones campesinas contra el uso de glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito y, de paso, exigir el cumplimiento del Punto Uno del Acuerdo de Paz con las FARC sobre Reforma Rural Integral, plan de sustitución voluntaria, gradual y concertada con los pequeños sembradores de coca (Fig. 7).



Durante el primer semestre de 2018 se realizaron seis protestas contra el *fracking* y para pedir a la empresa estatal de petróleos que sepultara la idea de abrir pozos pilotos con esta técnica. Y tras una protesta en varios departamentos del centro del

país en contra del inicio de la exploración de hidrocarburos con la técnica del fracking, la Agencia Nacional de Hidrocarburos informó que allí no se tenía previsto desarrollar ninguna actividad con dicha técnica (Fig. 8).

Detener el asesinato de líderes ambientales y sociales, la protección de los páramos, el agua y el respeto a las consultas populares también fueron motivos para que los ambientalistas salieran el 21N a las calles y los campos (Figs. 9, 10).



Niñas, niños, adolescentes también marcharon el 21 de noviembre para recordarnos que tan solo entre 2018 y 2019 se han registrado 14 movilizaciones. Nueve de ellas en lo que va corrido de

este gobierno, en las cuales se denunció el maltrato y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, incluidas la explotación sexual y la violación sexual. En cinco movilizaciones se denunció que tal violencia terminó en asesinatos (Fig. 11).

Entre 2018 y 2019, ha habido 39 movilizaciones para denunciar la violencia de género y feminicidios, y para develar que la guerra contra las mujeres ha arreciado.

Una de las poblaciones más afectadas por el desconocimiento de su “otredad” es la LGBTIQ, especialmente la población transgénero. Entre 2018 y 2019 estos colectivos realizaron siete manifestaciones y en todas pidieron no ser discriminadas (Fig. 12).



El 21N también ha posibilitado la expresión de inconformidades locales y particulares de ciertos sectores sociales. Por ejemplo, los recicladores de Bogotá se manifestaron el 21 de noviembre y recordaron protestas anteriores como la del 21 de mayo anterior, en torno a las normas urbanísticas que se les exige para la regularización de sus bodegas reciclaje.

En el sector académico, desde finales de septiembre de 2019, estudiantes de la Universidad Distrital de la capital protestaron contra la corrupción en ese centro educativo. A comienzos de noviembre, se declararon en paro indefinido y protestaron en la Alcaldía de Bogotá para pedir acciones concretas frente a los actos de corrupción.

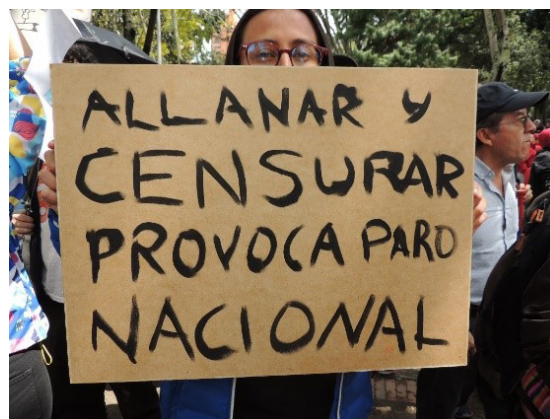
Simultáneamente, varios alumnos de esa misma universidad tomaron la sede principal como parte de su protesta por esos manejos irregulares. La represión a esas marchas involucró a estudiantes de la Universidad Javeriana que, solidarios, se sumaron a las protestas. Esto produjo un significativo acercamiento entre estudiantes de instituciones de educación superior privadas y públicas, algo que también continuó en el 21N (Fig. 13).



La petición de desmontar el ESMAD no era nueva. Esta petición vino incentivada, sobre todo, por la muerte de indígenas y estudiantes a manos de miembros de ese escuadrón policivo. A ello se sumó el rechazo de la violencia con la que fueron reprimidas las marchas estudiantiles de 2018. Luego, desde finales de septiembre de 2019, los universitarios marcharon para ratificar la petición de desmontar ese cuerpo policial, después de la manera violenta como intentaron acallar una manifestación de la Universidad Distrital con la que se solidarizaron estudiantes de la Universidad Javeriana. Durante el paro nacional del 21N, esta demanda no cesó de aparecer y se intensificó esta petición tras la muerte del estudiante Dilan Cruz por un agente del ESMAD el 23 de noviembre (Fig. 14).



Hubo otras protestas referidas a acciones policivas previas a la jornada del 21N: en concreto la diligencia de allanamiento que, dos días antes del paro, adelantó la policía en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a medios alternativos y universitarios de comunicación, a centros culturales y colectivos artísticos en distintas ciudades del país, a lo que se sumaron amenazas colectivas de distintos tipos que intentaban infundir miedo y frenar la movilización nacional. Pero ello tuvo un efecto contrario y hasta los títeres salieron a protestar (Fig. 15).



“¿Quiénes somos?
¡Los títeres!
¿A qué vinimos?
¡A marchar!”
(Figs. 16, 17)



Muchos carteles como este se vieron en el 21N. En ellos se expresa la intención de no terminar el paro “hasta que la dignidad se haga costumbre”, lo que debía pasar por un diálogo sobre la base de escuchar los reclamos sociales. Algo que el gobierno ofreció pero no cumplió (Fig. 18).



El 21N en otros escenarios

Además del protagonismo de las ciudades principales, el 21N tuvo dimensiones regionales y sectoriales que es bueno analizar. Así, por ejemplo, diversos pueblos indígenas fueron convocados por la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) o por sus autoridades propias a lo largo del país. Sus demandas centrales fueron el freno al asesinato de indígenas, el cumplimiento de los acuerdos con las comunidades y del capítulo étnico del Acuerdo de Paz; denunciaron también el desplazamiento de algunas comunidades originarias, exigieron la protección del agua y la biodiversidad, y con esto denunciaron la afectación de sus territorios por el modelo de desarrollo extractivista.

El pueblo afrocolombiano realizó igualmente grandes movilizaciones en varias ciudades contra el “genocidio estadístico” del último censo de 2018 en el que la población afrodescendiente fue mucho menor a la del censo anterior; lo que se debería a la falta de una perspectiva étnica en la formulación del cuestionario y la recopilación de la información. También exigieron el cumplimiento de los acuerdos de recientes Paros Cívicos de Buenaventura y Quibdó mientras denunciaron el asesinato de líderes y lideresas sociales. Es importante resaltar que en la marcha del 21N en

Bogotá, los pueblos étnicos decidieron salir en bloque: indígenas y afros se unieron para exigir su reconocimiento y autodeterminación.

En este punto se puede preguntar sobre la representatividad del campesinado en el Comité de Paro y sobre si demandas urbanas como el “paquetazo” de Duque interesan a las poblaciones rurales. Ambas preguntas se responden positivamente. Así la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas convocó a la movilización para exigir el cumplimiento de acuerdos que dieron fin a movilizaciones anteriores y reconocieron los derechos de los campesinos. En varias ciudades la participación campesina fue también una forma de respaldo del mundo rural a las luchas urbanas.

Como ya vimos, otras movilizaciones en el marco del 21N dieron cuenta específicamente de problemas locales o regionales. Así se denunciaron problemas de servicios públicos y transporte, daños ambientales por el extractivismo minero y los megaproyectos como grandes vías y represas.

Finalmente, es importante resaltar el protagonismo que los movimientos y organizaciones de mujeres tuvieron en algunas regiones, donde las luchas por los derechos de las mujeres rurales y urbanas, entre ellos el derecho a una vida libre de violencias, lideraron la convocatoria. En Medellín también se convocó al paro con acento feminista. Esta actividad no quiere decir que solo allí se hicieron visibles las mujeres; por el contrario, en muchas marchas fueron el rostro mayoritario de las multitudes.

Conclusión

Lo que este artículo ha mostrado es el desborde de las peticiones proclamadas por la gente en las marchas del 21N y días siguientes. Aun teniendo en cuenta la ampliación del pliego, las movilizaciones han rebasado por mucho a las organizaciones sociales y políticas que convocaron el paro ¿Qué hay detrás de este desborde? No hay duda de que los efectos de décadas de neoliberalismo juegan un papel significativo, especialmente en términos de la profundización de la desigualdad social. La persistencia del modelo

extractivista y depredador del medio ambiente, es otro motivo de disputa desde hace años y se expresó también en los reclamos. Sin embargo, la situación socioeconómica oprobiosa no es una novedad y en cualquier caso no permitiría explicar mecánicamente el surgimiento de unas movilizaciones de esta magnitud. Muchos de esos reclamos venían formulándose desde antes, como hemos visto a partir de las pancartas enarboladas el 21N.

También, en el caso colombiano se aducen razones como una crisis del régimen político derivada no tanto de la inexperiencia de Iván Duque para gobernar, sino por estar sometido al mandato del jefe de su partido, Álvaro Uribe Vélez. La ausencia de pactos con los partidos de centro-derecha limita su capacidad de maniobra en el congreso y, con la rama judicial, tampoco ha tenido un acercamiento armonioso. Esto no es sino la expresión en Colombia del desgaste de la democracia parlamentaria y la recuperación de las calles como espacios de participación directa ciudadana.

Otra interpretación posible es que dichos factores económicos, políticos y sociales se han articulado con la transición que implicó el fin de la guerra con las FARC. Los años de negociación y de implementación, a pesar de las dificultades, transformaron la agenda política del país y han permitido no solo que se le pierda miedo a la violencia en las calles, sino que emerjan con mayor ímpetu demandas sociales postergadas. En este contexto, realidades como el retorno del uribismo al poder con Duque, la persistencia y agudización de la violencia contra líderes sociales, la renuncia a la implementación del acuerdo de paz y la precaria negociación con varios actores sociales, profundizan el malestar de una parte considerable de la sociedad colombiana, pues se alejan de la idea de transición política implícita en los acuerdos de paz firmados en 2016.

En todo caso, parece que más allá de los motivos plasmados en las pancartas o los consignados en los pliegos formales de petición, hay una multiplicidad de demandas que no fueron negociadas, no tanto por su amplitud, sino porque apuntaban a modificaciones fundamentales del modelo de desarrollo y de

democracia colombianos. En eso nos acercamos a las movilizaciones recientes de países vecinos, especialmente en Ecuador, Chile y Bolivia. No decimos que las multitudes colombianas sean de izquierda o que estén por una forma de socialismo, pero que ciertamente los variados motivos de la movilización nos llevan a un horizonte muy amplio de expectativas, como tal vez no se había visto desde finales del siglo XX y comienzos del XXI. Seguramente muchas de esas demandas van a seguir sin ser satisfechas, al menos en lo que resta de este gobierno. Pero algo que se ha logrado es perderle el miedo a protestar en público.

Este panorama sugiere algunos interrogantes que deberán ser abordados en futuras investigaciones. Por ejemplo, ¿cómo se modificó la protesta en los tiempos del COVID-19 teniendo en cuenta no solo su aparente disminución, sino la mutación de las demandas, los repertorios y los participantes? Pero sobre todo, ¿cómo explicar el rápido paso de una lucha social contenida por los confinamientos obligatorios a un estallido tan radical como el del 9 y 10 de septiembre en las principales ciudades, ante la violencia policial? ¿Qué rupturas y continuidades encierran estos eventos recientes? //